

# Explotación Directa del Petróleo

(Especial para "El Nacional")

**E**L movimiento nacionalista, para su efectivo afianzamiento, tiene que derribar toda una serie de conceptos y "teorías" que hábil y sigilosamente han venido elaborando y propagando los interesados en mantener subyugados a nuestro país. En lo que se refiere a la reconquista de nuestro petróleo, es mucho lo que hemos avanzado en ese sentido. Para grandes sectores de la población, sin excluir a los grupos de técnicos especializados en las diversas operaciones de extracción, transporte, refinación y distribución, el petróleo era riqueza natural tan misteriosa y compleja, que su manipulación sólo podían realizarla con eficiencia los grandes trusts internacionales. Hablar siquiera de que Venezuela debía asumir la responsabilidad de extraerlo y venderlo por su propia cuenta, les parecía un exabrupto. Estábamos condenados —según esa antinatural concepción— a permanecer de observadores mudos ante el saqueo de que éramos objeto y a contentarnos con las migajas que esos trusts quisieran dejar caer en nuestras manos. Pero de algunos años a esta parte, el panorama se ha transformado apreciablemente. Los que se oponen y objetan que la Nación explote directamente su petróleo van quedando en minoría. El derecho de Venezuela a intervenir activamente en la explotación de su petróleo, la capacidad para proceder a administrar esa riqueza natural en beneficio de la Nación y en defensa de su disfrute por las generaciones futuras, es ya una posición generalizada a la que sólo se oponen los trusts internacionales y los sectores más reaccionarios que les sirven de agentes de penetración.

En la nutrida concurrencia que asistió el lunes pasado a la Mesa Redonda convocada por la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo en el Colegio de Ingenieros, para discutir en torno a los objetivos y funcionamiento de una "Empresa Nacional de Petróleo", sólo una voz y media —media porque apoyó sin intervenir— se alzaron para abogar por el mantenimiento de la exclusiva explotación del petróleo por compañías extranjeras, arguyendo que el Estado es un pésimo administrador y que la explotación por las compañías es la que más beneficios reporta al país. Salvo esa voz y media todos los que intervinieron en la discusión se pronunciaron por la creación de la empresa nacional, disintiendo en cuanto a los objetivos que se debían perseguir de inmediato.

De la intervención del representante del Ministro de Minas e Hidrocarburos se interpretó que el Gobierno se proponía crear una Compañía o Corporación cuyos objetivos serían sentar las bases de un organismo que permitiera al Estado al mismo tiempo que profundizar en el estudio y práctica de operación de las empresas que explotan el petróleo, estar en capacidad para asumir la explotación de aquellos pozos que fueran siendo abandonados por los concesionarios o de las concesiones que llegaran a su término. Esa compañía o corporación entraría en competencia de calidad con las empresas existentes y de ninguna manera en cuanto a participación en los mercados; que tendría una organización eficientemente comercial, es decir, que funcionaría a base de obtener beneficios, pagar los mismos impuestos, royalties, etc., de las otras empresas concesionarias. Su objetivo a largo y corto plazo sería el de asumir la explotación del petróleo, bajo control del Estado, habida cuenta que el Gobierno ratificaba la política de no otorgamiento de nuevas concesiones y porque existían en el país extensas áreas que aún no habían

## SALVADOR DE LA PLAZA

sido explotadas y sobre las cuales no habían sido otorgadas concesiones a particulares.

Esos propósitos, incluso calificados de tímidos, fueron rebatidos contraponiendo varios oradores puntos de vista que podrían ser resumidos así:

a) —El organismo nacional del petróleo, independientemente del nombre que en definitiva se le dé, debía tener por objetivo la realización de todas las operaciones que tendieran a incorporar la explotación del petróleo en el proceso de desarrollo independiente de la economía nacional, es decir que debería explorar, explotar, transportar, refinar y hasta concurrir con su petróleo y su gas al mercado interno y exterior, para venderlos directamente o usarlos para trueque por artículos, maquinarias o materias primas que hoy se importan y pagamos con divisas;

b) —Las reservas nacionales están siendo drenadas por los concesionarios colindantes; la explotación de esas reservas es de imperiosa urgencia, pues de no procederse a ello y esperar a que las concesiones lleguen a su término en 1983, nos encontraremos con yacimientos exhaustos. Las inversiones para exploración y taladro de pozos en las reservas nacionales son relativamente poco costosas, pues el Estado tiene el derecho, y los concesionarios la obligación de suministrarlos, de recabar de éstos todos los datos técnicos sobre localización de yacimientos, posición e inclinación de los mismos, lo que permite al Estado proceder a la extracción del crudo con el menor riesgo posible;

c) —En consecuencia y explotando directamente el petróleo de las reservas, el organismo nacional debía, en contra de lo que corrientemente se ha opinado, abstenerse de utilizar el crudo proveniente de los royalties para concurrir al mercado exterior o para refinarlo; que los royalties debían continuar vendiéndose a los concesionarios como a un comprador cualquiera, siempre que los pagaran de acuerdo a los precios del mercado internacional, a fin de no alterar el monto efectivo de los ingresos del Presupuesto Nacional ni correr los riesgos de sabotajes por parte de los trusts, caída de precios, etc.;

d) —Que el organismo nacional del petróleo debía refinar y concurrir al mercado interno para abastecerlo no sólo de los derivados cuya distribución escaparan actualmente las compañías extranjeras, sino de aquellos que todavía se importan no obstante las grandes refinerías existentes en el país. El abastecimiento interno, el transporte y la distribución del crudo y sus derivados se interpretó como una medida de seguridad nacional, de defensa nacional. El país no puede continuar dependiendo de compañías extranjeras para su abastecimiento interno de combustibles.

e) —Que debía delimitarse claramente: 1.—La política con respecto a los actuales concesionarios, sistemas de control, de conservación del petróleo y del gas, limitación de la producción, fiscalización sobre impuestos petroleros y del impues-

to sobre la renta, sobre el royalty, etc. a objeto de garantizar una cada vez mayor participación de la Nación en la explotación del petróleo que extraen los concesionarios —funciones propias del Ministerio de Minas e Hidrocarburos— y, 2.—los objetivos y funcionamiento del organismo que explotará directamente el petróleo bajo el control del Estado, de manera que asegure a ese organismo la independencia y autonomía necesarias y evitar confusiones que podrían traducirse en perjuicios para los intereses nacionales. Las actividades del Estado como fiscalizador de los trusts concesionarios son diferentes a las que deberá desarrollar como administrador de la explotación directa del petróleo y del gas y, por tanto, estar claramente diferenciadas.

El lunes pasado se expusieron interesantes argumentos en apoyo de estas conclusiones, las que resumimos como resultado de la primera reunión de la Mesa Redonda. El miércoles y viernes continuó la discusión sobre otros aspectos que serán objeto de próxima nota.